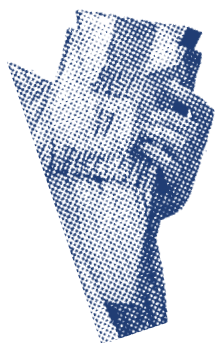


NOAM



CHOMSKY



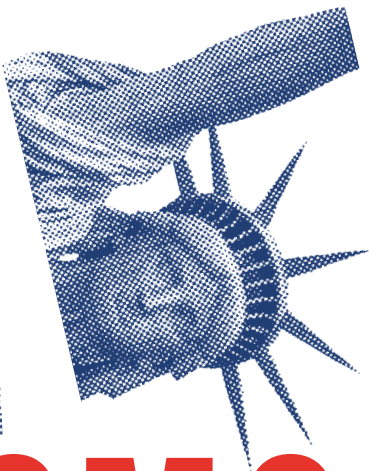
**Cómo la política exterior de EE.UU
pone el mundo en peligro**

EL MITO

DEL



**IDEALISMO
AMERICANO**



NATHAN J. ROBINSON

Ariel

Noam Chomsky y Nathan J. Robinson

El mito del idealismo americano

Cómo la política exterior de EE.UU.
pone el mundo en peligro

Traducción de María Serrano

Ariel

Título original: *The Myth of American Idealism. How U.S. Foreign Policy Endangers the World*

Primera edición: abril de 2025

© Noam Chomsky y Nathan J. Robinson, 2024
Esta edición se publicó por acuerdo con Penguin Press, un sello de Penguin Publishing Group, una división de Penguin Random House LLC

© por la traducción, María Serrano, 2025

Derechos exclusivos de edición en español:
© Editorial Planeta, S. A., 2025
Avda. Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona
Editorial Ariel es un sello editorial de Planeta, S. A.
www.ariel.es
www.planetadelibros.com

ISBN: 978-84-344-3857-6
Depósito legal: B. 5.371-2025

Impreso en España

La lectura abre horizontes, iguala oportunidades y construye una sociedad mejor. La propiedad intelectual es clave en la creación de contenidos culturales porque sostiene el ecosistema de quienes escriben y de nuestras librerías. Al comprar este libro estarás contribuyendo a mantener dicho ecosistema vivo y en crecimiento. En **Grupo Planeta** agradecemos que nos ayudes a apoyar así la autonomía creativa de autoras y autores para que puedan seguir desempeñando su labor. Dirígete a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesitas fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puedes contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

Queda expresamente prohibida la utilización o reproducción de este libro o de cualquiera de sus partes con el propósito de entrenar o alimentar sistemas o tecnologías de inteligencia artificial.



Índice

<i>Prefacio</i> , por Nathan J. Robinson	11
<i>Introducción</i> : Nobles fines, lógica mafiosa	15

PRIMERA PARTE

LA CRÓNICA: EL IDEALISMO EN ACCIÓN

1. Disciplinar el sur global	41
2. La guerra en el sudeste asiático	89
3. El 11 de septiembre y la destrucción de Afganistán	115
4. Irak: el crimen del siglo	141
5. Estados Unidos, Israel y Palestina	175
6. La gran amenaza china	211
7. La OTAN y Rusia después de la Guerra Fría	229
8. Amenaza nuclear y catástrofe climática	253

SEGUNDA PARTE

COMPRENDER EL SISTEMA DE PODER

9. Las raíces interiores de la política exterior	287
10. El derecho internacional y el «orden basado en reglas»	303
11. Cómo se fabrican las mitologías	327
<i>Conclusión</i> : ¿Hegemonía o supervivencia?	347
<i>Notas</i>	365
<i>Índice analítico</i>	471

Disciplinar el sur global

El 11 de septiembre de 1973, el general Augusto Pinochet derrocó al presidente democráticamente electo, Salvador Allende, y se hizo con el poder en Chile. Pinochet, uno de los dictadores más brutales de la historia reciente, llevó a cabo matanzas masivas, torturas sistemáticas, orquestó un programa de asesinatos para perseguir a los disidentes que habían conseguido huir al extranjero y metió en la cárcel a decenas de miles de personas. Acabó con la democracia en Chile por toda una generación. Traducido a términos per cápita, si el terror impuesto por Pinochet se hubiera producido en Estados Unidos, habría supuesto 150.000 muertos y un millón de personas torturadas, además del derrocamiento del presidente y el fin del sistema electoral. El primer 11 de septiembre fue puro terrorismo de Estado.

En sus memorias, el exasesor de seguridad nacional y exsecretario de Estado, Henry Kissinger, es franco acerca del papel que desempeñó Estados Unidos en estos acontecimientos. La presidencia izquierdista de Allende representaba, según Kissinger, «un desafío permanente» a la posición de Estados Unidos «en el hemisferio occidental». Kissinger desestima todo debate sobre la legitimidad de interferir en las elecciones de otros países o de planificar golpes de Estado, afirmando: «No puedo aceptar el planteamiento de que Estados Unidos esté excluido de actuar en esa zona gris entre la diplomacia y la intervención militar». Relata que Richard Nixon se puso furioso ante la elección de Allende: «Quería hacer todo lo posible para

impedir que accediera al poder: si había una posibilidad entre diez de librarnos de Allende, debíamos intentarlo». Bajo la administración Nixon, la CIA alentó y financió un complot que resultó en el asesinato del general René Schneider, comandante en jefe del ejército chileno, cuyo firme compromiso con la Constitución del país se consideraba un obstáculo para un golpe de Estado exitoso. La orden de Nixon fue que «los programas de ayuda a Chile debían ser recortados y su economía estrangulada hasta que “gritara”», es decir, había que hacerle la vida imposible al pueblo chileno para castigarlo por votar de manera incorrecta.¹

El libro de Peter Kornbluh, *Pinochet: los archivos secretos*, publicado por el Archivo de Seguridad Nacional, se basa en documentos desclasificados para mostrar cómo el Gobierno de Estados Unidos operó para socavar y destruir a Allende desde el momento en que fue elegido, y cómo prodigó su apoyo a Pinochet después del golpe, al tiempo que mentía sistemáticamente sobre su implicación. La administración Nixon no solo impuso un «bloqueo invisible», sino que «los registros del Consejo de Seguridad Nacional muestran de manera inequívoca que [...] actuó políticamente con rapidez y secretismo para cortar la ayuda multilateral y bilateral a Chile» una vez que Allende asumió el cargo, y culpó del caos económico resultante a las propias políticas de este. Kissinger testificó en falso ante el Senado en 1974, afirmando que «la intención de Estados Unidos no era desestabilizar ni subvertir» al presidente chileno, a pesar de que, internamente, había recomendado acciones que «podrían llevar al colapso o al derrocamiento de [Allende]». Kissinger fue claro al explicar a Nixon por qué no se podía permitir que Allende triunfara. «No veo por qué tenemos que quedarnos de brazos cruzados viendo cómo un país se vuelve comunista debido a la irresponsabilidad de su pueblo. Son asuntos demasiado importantes como para dejar que los votantes chilenos decidan por sí mismos», afirmó Kissinger. Allende representaba «amenazas muy graves» para los intereses estadounidenses, incluidas la posible pérdida de «inversiones norteamericanas (por un total de unos mil millones

de dólares)», y el posible «efecto modelo» que podría tener Allende en el mundo si su país lograba prosperar. El «ejemplo que sentaría el éxito de un Gobierno marxista» tendría «valor de precedente» en otras partes del mundo y la «propagación de fenómenos similares» afectaría «de manera significativa el equilibrio global» y a la posición de Estados Unidos en él. El propio Nixon declaró: «Nuestra principal preocupación en Chile es la posibilidad de que [Allende] pueda consolidarse y proyecte al mundo una imagen de éxito».²

Así, pocos días después de que Allende asumiera el cargo, Nixon convocó al Consejo de Seguridad Nacional para valorar formas de «provocar su caída». Un telegrama de la CIA de 1970 manifestaba: «Es una política firme y continuada que Allende sea derrocado mediante un golpe», y prometía «máxima presión para lograr ese fin utilizando todos los recursos apropiados». Al tiempo, advertía: «Es imperativo que estas acciones se lleven a cabo de manera clandestina y segura para que el USG [Gobierno de los Estados Unidos] y la mano americana se mantengan ocultas».³

Stephen M. Streeter, en un estudio exhaustivo basado en los archivos estadounidenses, concluye que «el objetivo fundamental de la administración Nixon fue impedir que Allende llegara a la presidencia, bien por medios constitucionales, o bien promoviendo un golpe militar», mientras que «el objetivo mínimo era castigar a Chile para que ningún otro país latinoamericano se sintiera tentado a seguir la vía chilena hacia el socialismo». Una vez que Allende fue derrocado, la administración Nixon apoyó inmediatamente la junta de Pinochet. Kissinger le dijo al militar que había hecho un «gran servicio a Occidente» poniendo fin a la democracia chilena.⁴

El problema con Allende era que representaba la amenaza de un buen ejemplo. Si hubiera tenido éxito en su proyecto de nacionalismo independiente y economía de izquierdas, habría inspirado a otros países a seguir un camino similar, lo que habría reducido el poder de Estados Unidos en la región. Había que acabar con él.

Tras la Segunda Guerra Mundial, diseñadores de la agenda política como George Kennan entendieron que para las corporaciones estadounidenses era crucial la reconstrucción de las sociedades industriales occidentales, pues debían tener capacidad para importar productos manufacturados estadounidenses y generar oportunidades de inversión.

No obstante, también era fundamental restablecer el orden tradicional, donde las empresas ocupaban una posición dominante y la capacidad de organización de los trabajadores estaba debilitada y fragmentada, y que la carga de la reconstrucción recayese directamente sobre los hombros de las clases pobres y trabajadoras. El principal obstáculo que se presentaba ante ello era la resistencia antifascista. De modo que Estados Unidos la reprimió activamente en todo el mundo, en muchos casos prefiriendo que fueran antiguos fascistas y colaboradores nazis quienes ocuparan el poder.⁵ A veces eso requirió el uso de una violencia extrema, pero otras veces se llevó a cabo por medio de métodos más sutiles; por ejemplo, manipulando elecciones o reteniendo unos suministros alimentarios desesperadamente necesarios.

Los estrategias estadounidenses reconocían que lo que planteaba una «amenaza» en la Europa de posguerra no era una posible agresión soviética, aunque la administración Truman se encargó de hacer creer al público lo contrario. «No es el poder militar ruso el que nos amenaza, sino su poder político», concluyó George Kennan en 1947. El historiador Melvyn Leffler ha argumentado que «el poder soviético palidecía frente al de Estados Unidos», pues era una «nación devastada y exhausta», y por ello, los altos cargos de la administración estadounidenses «no creían probable una agresión militar soviética». Lo que suponía una amenaza era «el posible renacimiento de un nacionalismo virulento o el desarrollo de una postura neutral independiente». Los estrategias «definían la seguridad en términos de correlaciones de poder» y «concebía el poder en términos de control sobre los recursos o acceso a ellos». Desde esta lógica, cualquier amenaza que se planteara al control estadounidense de los recursos suponía una amenaza para la seguridad nacional.⁶

Leffler señala que, después de la guerra, la ciudadanía de cualquier lugar del mundo «deseaba un orden social y económico más justo y equitativo» y exigía «reformas, nacionalizaciones y bienestar social». Lo que en ese momento todas las sociedades esperaban era «que sus Gobiernos las protegieran de los caprichos de las fluctuaciones del mercado, la codicia de los capitalistas y las ocasionales catástrofes naturales», y consideraban que todo ello era «lo que les correspondía por los sacrificios que habían soportado y las dificultades por las que habían pasado».

Un ejemplo es Italia, donde un movimiento popular de obreros y campesinos, liderado por el Partido Comunista, había logrado reprimir a seis divisiones alemanas durante la guerra y liberar el norte del país. Sin embargo, a medida que las fuerzas estadounidenses fueron avanzando, dispersaron esta resistencia antifascista y restauraron la estructura básica del régimen fascista anterior a la guerra. La CIA temía que los comunistas accedieran legalmente al poder en las cruciales elecciones italianas de 1948 y se implementaron muchas técnicas para evitarlo, entre ellas el restablecimiento de la antigua policía fascista, la disolución de los sindicatos y la retención de la ayuda internacional. Con todo, seguía sin estar claro que al Partido Comunista se le pudiera derrotar. El primer memorando del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense, el NSC 1 (1948), detallaba toda una serie de medidas que adoptaría Estados Unidos en caso de que los comunistas fueran los vencedores de aquellas elecciones. Una de las respuestas que se contemplaba era la intervención armada en forma de apoyo militar para operaciones clandestinas en Italia. Incluso se consideraba la opción de respaldar un golpe de Estado para detener a la izquierda, a pesar de la conciencia de que ello encerraba la «probabilidad [de] sumir a Italia en [una] sangrienta guerra civil y un serio riesgo [de] detonar [la] Tercera Guerra Mundial». El derecho a invalidar la voluntad popular era algo que se daba por hecho.⁷

La interferencia electoral fue una práctica constante. Entre 1948 y principios de la década de 1970, la CIA financió con

más de 65 millones de dólares a partidos políticos que contaban con el beneplácito de Estados Unidos y sus aliados. «Teníamos bolsas de dinero que entregábamos a políticos seleccionados para sufragar sus gastos», admitió un exagente de la CIA, F. Mark Wyatt.⁸ De hecho, entre 1946 y 2000, Estados Unidos llevó a cabo por todo el mundo más de ochenta operaciones para intervenir en procesos electorales. Scott Shane, corresponsal de seguridad nacional de *The New York Times*, sugiere que tales operaciones, que incluyen la difusión de noticias falsas y la entrega de «maletas con dinero» a candidatos afines, se mantienen aún hoy. Según Shane, «lo que haya hecho la CIA en los últimos años para manipular elecciones en países extranjeros sigue siendo un secreto, y puede que la verdad no llegue a saberse hasta dentro de varias décadas». Shane cita a un exoficial de la CIA que confirma que estas prácticas «no cambian nunca», y a otro que asegura: «Espero que sigamos haciéndolo». La cuestión de su legitimidad no se plantea en el debate público. No obstante, ante el intento de Vladímir Putin de influir en las elecciones presidenciales estadounidenses sí se produjo un gran histerismo.⁹

En Grecia, los soldados británicos entraron en el país tras la retirada nazi e impusieron un régimen corrupto que generó una renovada resistencia. Gran Bretaña, en pleno declive de posguerra, fue incapaz de mantener el control y, en 1947, Estados Unidos intervino, apoyando una guerra brutal contra el Gobierno provisional en la que murieron 160.000 personas, según los cálculos más pesimistas. En el marco de la guerra se produjeron torturas, el exilio político para decenas de miles de griegos, un programa de «reeducación» para izquierdistas encarcelados y la destrucción de los sindicatos, así como de cualquier posibilidad de desarrollar una política independiente.

Gran parte de la población tuvo que emigrar para sobrevivir. Entre los beneficiarios de esta situación estuvieron los inversores estadounidenses y sus colaboradores nazis, mientras que las principales víctimas fueron los trabajadores y los campesinos que integraron la resistencia antifascista, dirigida por

los comunistas. Nuestra exitosa defensa de Grecia contra su propia población fue el modelo que seguimos en la guerra de Vietnam, tal como Adlai Stevenson explicó ante las Naciones Unidas en 1964: «La cuestión en Vietnam hoy es la misma que en Grecia en 1947 y en Corea en 1950». Los asesores de Reagan recurrieron exactamente al mismo modelo para referirse a América Central, y el patrón se siguió también en muchos otros lugares.¹⁰

En Japón, Washington inició, en 1947, el llamado «curso inverso», que puso fin a los primeros intentos de democratización emprendidos por la administración militar del general MacArthur. El curso inverso supuso la supresión de los sindicatos y otras fuerzas democráticas. Casi 30.000 personas sospechosas de ser izquierdistas fueron purgadas de sus empleos en los sectores público y privado, así como de los centros de enseñanza. El país quedó firmemente bajo el control de elementos corporativos que habían apoyado al fascismo japonés (y Estados Unidos encubrió incluso los crímenes de guerra cometidos por Japón). Como señalan los historiadores John Dower y Hirata Tetsuo, si bien la «Purga Roja se llevó a cabo agresivamente como parte de la política anticomunista de la ocupación [...], fue, en realidad, una confrontación entre la mano de obra y el capital». Dower escribe que, andando el tiempo, Estados Unidos «comenzó a desechar muchos de sus ideales originales de “desmilitarización y democratización” y «se fue alineando cada vez de forma más abierta con los elementos conservadores e incluso con la derecha de la sociedad japonesa, incluidos individuos que habían estado estrechamente vinculados con la guerra perdida».¹¹ Cuando las fuerzas estadounidenses entraron en Corea en 1945, disolvieron el Gobierno popular, compuesto principalmente por antifascistas que habían resistido ante los japoneses, e iniciaron una brutal represión, empleando a la policía fascista japonesa y a coreanos colaboracionistas de la época de la ocupación. En Corea del Sur, antes de lo que hoy llamamos la guerra de Corea, murieron cerca de cien mil personas, de ellas entre treinta y cuarenta mil durante la represión de una revuelta campe-

sina en una pequeña región, la isla de Jeju. Esa masacre, en la que Estados Unidos tiene una «hondísima responsabilidad» (en palabras del historiador Bruce Cumings), la llevaron a cabo militares y policías surcoreanos bajo el mando norteamericano. A uno de los supervivientes de la masacre de la isla de Jeju, de ochenta y tres años, se le preguntó en 2022 sobre lo que esperaba de Estados Unidos. Dijo que lo único que necesitaba era una «disculpa humana sincera», la voluntad de que viniera y le diese la mano. Aún está esperando.¹²

LA AMENAZA DE UN BUEN EJEMPLO

El objetivo de la estrategia norteamericana era evitar cualquier posible desafío al «poder, la posición y el prestigio de Estados Unidos», tal como lo expresó el reconocido estadista liberal Dean Acheson en 1963. A menudo, son los países más débiles y pobres los que generan mayor histeria. Al fin y al cabo, si un país pequeño y con poco poder desafía a Estados Unidos, lo deja expuesto a los ojos de los demás como un «tigre de papel». Michael Grow lo explica bien en su libro *U.S. Presidents and Latin American Interventions: Pursuing Regime Change in the Cold War*, donde expone que los países considerados «amenazas» no lo eran ni para la seguridad de Estados Unidos ni para sus intereses económicos; sin embargo, podían inspirar otros desafíos en nuevos lugares y socavar la «credibilidad» norteamericana.¹³

Veamos un ejemplo menor: la Guayana Británica, donde la administración Kennedy aprobó una operación encubierta de la CIA para influir en las elecciones nacionales. El objetivo de la operación era impedir que el partido de Cheddi Jagan, un dentista con inclinaciones socialistas, ganara las elecciones. No iban a tolerar una «segunda Cuba», es decir, otro Gobierno de izquierdas en el hemisferio. Los documentos desclasificados y los registros históricos revelan que la CIA fue autorizada a destinar importantes recursos para sabotear la democracia en ese país. Estados Unidos intentó impedir que la Guayana Británica

obtuviera la independencia de Gran Bretaña para frenar la expansión de la socialdemocracia. Las acciones estadounidenses también incluyeron incitación a la violencia y agitación, y hay informes que señalan que agentes y ciudadanos estadounidenses promovieron asesinatos, incendios y atentados con bombas, y participaron en la creación de una atmósfera general de miedo. Dean Rusk, secretario de Estado, comunicó a Gran Bretaña que había llegado a la conclusión de que no podían tolerar «una Guayana Británica independiente bajo el mando de Jagan». Estados Unidos asumía, simplemente, que era prerrogativa suya decidir a qué líderes iban a «tolerar». Stephen Rabe, el principal historiador de la intervención estadounidense en la Guayana Británica, resume así los horribles resultados de todo aquello: «La aniquilación de un Gobierno elegido democráticamente, el debilitamiento de los procedimientos electorales democráticos, la destrucción de la economía de un país pobre y la incitación a la guerra racial. Forbes Burnham, el racista despiadado que Estados Unidos apoyó, convirtió la Guayana en un lugar peligroso y brutal, una pesadilla diaria para la mayoría de la población india». Se trataba de un país que no tenía ninguna importancia económica para Estados Unidos y sin duda tampoco representaba una amenaza para la «seguridad nacional». La intervención fue una muestra clara de lógica mafiosa: lo que nosotros decimos se hace. La necesidad de humillar a quienes levantan la cabeza es un elemento indisociable de la mentalidad imperial.¹⁴

Otro ejemplo es la República Democrática del Congo, un país enorme, rico en recursos y con una de las historias de terror más oscuras de la era contemporánea. En 1960, con la llegada al poder de Patrice Lumumba como primer ministro, el país tenía la oportunidad de progresar de forma exitosa, pero Occidente no quiso ni contemplar la posibilidad de que tal cosa sucediese. El director de la CIA, Allen Dulles, determinó que la eliminación de Lumumba debía ser «un objetivo urgente y primordial» de las operaciones encubiertas, principalmente porque las inversiones estadounidenses podrían verse amenazadas por lo que los documentos internos denominaban «nacionalistas radi-

cales». La CIA centró su esfuerzo en organizar la «eliminación permanente» de Lumumba y, bajo la supervisión de oficiales belgas, este fue asesinado, cumpliendo el deseo del presidente Eisenhower de que «cayera en un río lleno de cocodrilos». En su definitivo estudio sobre el asesinato, los autores Emmanuel Gerard y Bruce Kuklick concluyen que «los europeos y los estadounidenses incitaron a los africanos a encarcelar a Lumumba y a conseguir su sentencia de muerte» pues «Occidente no podía concebir un Estado africano independiente con capacidades económicas y políticas comparables a las de los países europeos». Y «Lumumba aspiraba a una grandeza que Occidente no iba a tolerar». Y este no fue un caso aislado. Estados Unidos intervino en el África poscolonial por extenso y en secreto. Como escribe Susan Williams en *White Malice: The CIA and the Covert Recolonization of Africa*, los años de la independencia africana «fueron también años de una intensa y rápida infiltración de la CIA» en el continente, y los registros «muestran una magnitud y amplitud de las actividades de la CIA en África que rozan lo increíble». El propio Congo fue entregado a manos del favorito de Estados Unidos, el dictador corrupto y asesino Mobutu Sese Seko. Stuart Reid, en *El complot Lumumba*, cuenta que, dado que «un líder aparentemente prosoviético fue eliminado y reemplazado por otro manifiestamente proamericano [...]», desde la perspectiva de Washington, el Congo fue un éxito». ¹⁵

La guerra contra Vietnam también surgió de la necesidad de asegurarse el dominio de la zona. Los nacionalistas vietnamitas no querían aceptarlo, por lo que debían ser aplastados. La amenaza no consistió nunca en que aquella población mayoritariamente campesina fuera a conquistar nada. El verdadero peligro estaba en que podían convertirse en un ejemplo de independencia nacional que sirviera de inspiración a otros países de la región. El temor real era que, si el pueblo de Indochina lograba la independencia y creaba una sociedad más justa, el de Tailandia podría seguir su ejemplo, y si también tenía éxito, Malasia haría lo mismo. Muy pronto, Indonesia seguiría un camino independiente y una parte significativa de nuestra «Gran Área» se habría perdido.

Esto significa que, en cierto sentido, lo que se conoció como la «teoría del dominó» tenía algo de verdad. La versión oficial de la teoría era, obviamente, ridícula: sugería que el comunismo, de no ser derrotado en Vietnam, acabaría llegando hasta las costas de Estados Unidos. La verdadera amenaza era, en cambio, el «buen ejemplo». Los diseñadores de la agenda política estadounidenses, desde Dean Acheson a finales de la década de 1940 hasta la actualidad, han advertido sobre el peligro de que «una manzana eche a perder toda la cesta». La preocupación era que esa «podredumbre», es decir, el desarrollo social y económico, se extendiera. Por eso había que mantener a raya a países pequeños como la Guayana Británica, Granada o Laos.

El argumento de la seguridad es demasiado ridículo para tomarlo en serio, y tampoco es el caso que los recursos de estos países fueran demasiado valiosos para perderlos. La verdadera preocupación, más bien, estaba en el efecto «dominó». Y de la teoría de la manzana podrida se deduce que cuanto más pequeño y débil es el país, cuantos menos recursos posee, más peligroso resulta. Tal como explicó George H. W. Bush en su análisis de la política de seguridad nacional con respecto a las «amenazas del tercer mundo», no se trata solo de derrotar simplemente a los «enemigos mucho más débiles», sino de derrotarlos de manera rápida y decisiva, porque cualquier otro desenlace sería «vergonzoso» y podría «minar el apoyo político». Aunque un enemigo «mucho más débil» no represente una amenaza seria, hay que destruirlo para que la lección quede clara. Si un país marginal y empobrecido consigue emprender un camino independiente, otros podrían imitarlo.¹⁶

Si lo que se busca es un sistema global que esté subordinado a las necesidades de los inversores estadounidenses, no se puede permitir que se pierdan partes de ese sistema. Chile, por ejemplo, podría comunicar un mensaje indeseado a los votantes de otros países. ¿Qué ocurriría si decidieran tomar el control de su propio país? Eso no se puede permitir. John Foster Dulles, secretario de Estado, llegó a describir a los lati-

noamericanos como «niños indisciplinados que pretenden atribuirse todos los privilegios y los derechos de los adultos» y, por tanto, requieren «una mano dura, una mano autoritaria» (aunque también aconsejó al presidente Eisenhower que, para controlar eficazmente a los niños indisciplinados, podría ser útil «darles una palmadita y hacerles creer que se les tiene cariño»). Como señala el historiador Lars Schoultz, destacado especialista académico en derechos humanos en América Latina, el objetivo de instalar unos Estados de Seguridad Nacional era «eliminar de forma permanente cualquier posible amenaza a la estructura de privilegio socioeconómico existente, suprimiendo la participación política de la mayoría numérica». ¹⁷

A veces, esta idea ha llegado a expresarse con gran claridad. Cuando Estados Unidos estaba diseñando sus planes para derrocar la democracia guatemalteca, en 1954, uno de los trabajadores del Departamento de Estado advirtió que la «reforma agraria» de Guatemala era una poderosa herramienta propagandística, y que su «amplio programa social de ayudas para los trabajadores y campesinos» entrañaba un «enorme atractivo» para otros países centroamericanos con altos niveles de desigualdad social. Por eso, Guatemala representaba una «amenaza a la estabilidad de Honduras y El Salvador». ¹⁸

En otras palabras, lo que Estados Unidos busca es «estabilidad», es decir, seguridad para las «clases altas y las grandes empresas extranjeras». Si esto puede lograrse por medio de mecanismos democráticos formales, tanto mejor. Pero si no es posible, la «amenaza a la estabilidad» que el «buen ejemplo» plantea debe ser eliminada antes de que se extienda el contagio. De ahí que hasta la más ínfima mota pueda ser vista como una enorme amenaza.

CUBA: LA PEQUEÑA REPÚBLICA INFERNAL

Poco después de que Cuba derrocaria a su dictador, Fulgencio Batista, que contaba con el apoyo de Estados Unidos, la peque-

ña isla fue sometida a un ferocísimo ataque por parte de la superpotencia mundial. Fidel Castro llegó al poder a principios de 1959. Para marzo de 1960 ya se había tomado la decisión secreta de derrocarlo. En 1961, la administración Kennedy emprendió la invasión de la bahía de Cochinos, enviando una fuerza paramilitar para acabar con el Gobierno cubano, lo que terminó en una derrota humillante.

Este fracaso desató el histerismo en Washington. Chester Bowles, quien trabajaba entonces en el Departamento de Estado, contó que entre los altos cargos de la administración se generó una actitud «emocional, casi salvaje»: «[Castro] no puede hacernos esto. Tenemos que darle una lección». Kennedy lanzó una guerra para infligir sobre Cuba «los terrores de la tierra». Su hermano, Robert Kennedy, que estuvo a cargo de la operación, buscaba cubanos que pudieran «agitar las cosas en [la] isla mediante el espionaje, el sabotaje, desórdenes en general». La Cuba Task Force puso en marcha una campaña destinada a «la destrucción de objetivos clave para la economía».¹⁹

Los numerosos complots de la CIA para asesinar a Castro son ahora notorios y hasta pueden contemplarse como algo cómico (el uso de un puro explosivo, un traje de buceo envenenado...). No obstante, cualquier otro país que pusiera el mismo empeño en asesinar a un mandatario sería considerado un Estado terrorista. De hecho, llegaron a idearse planes criminales aún más desquiciados, entre ellos una «propuesta de la CIA para que agentes de Estados Unidos secuestraran aviones norteamericanos o bombardearan objetivos norteamericanos, culpando luego a Cuba de los ataques para justificar una invasión». Aunque este plan no se llevó a cabo, sí lo hicieron muchas otras acciones terroristas. En una de las misiones, «un equipo de siete hombres voló un puente ferroviario, provocó que un tren descarrilara y quemó un almacén de azúcar». «En realidad hacíamos prácticamente cualquier cosa que se pueda imaginar», relató más tarde un miembro de la CIA, desde poner agentes contaminantes en el azúcar hasta verter «químicos invisibles e imposibles de rastrear en fluidos lubricantes que se

enviaban a Cuba» para dañar los motores diésel. Como Keith Bolender documenta en su inquietante estudio *Voices from the Other Side: An Oral History of Terrorism Against Cuba*, «el pueblo cubano ha soportado durante medio siglo casi todas las formas de terrorismo imaginables»: bombas contra objetivos civiles, atentados en aldeas y hasta terrorismo biológico. «Los responsables —escribe— han sido sobre todo contrarrevolucionarios cubanoamericanos, muchos de ellos supuestamente entrenados, financiados y apoyados por varias agencias del Gobierno estadounidense.»²⁰

En 1962, Kennedy ordenó un embargo total contra Cuba. En una violación directa del derecho internacional, el embargo incluía la prohibición de exportar productos alimentarios y medicinas. La explicación interna de los altos cargos de la administración estadounidenses era que el pueblo cubano era «responsable de su régimen». Por tanto, Estados Unidos consideraba que tenía derecho a castigarlos y, además, que si el pueblo cubano pasaba hambre, expulsaría a Castro. Kennedy estuvo de acuerdo en que el embargo aceleraría la salida de Fidel Castro al provocar «un creciente malestar entre los cubanos hambrientos». En 1960, un alto cargo del Departamento de Estado expuso claramente la estrategia: puesto que Castro podría ser derrocado «por medio del desencanto y la desafección causados por las dificultades económicas y la insatisfacción», debían «emprenderse rápidamente todas las acciones posibles para debilitar la vida económica de Cuba [a fin de] provocar el hambre, la desesperación y [el] derrocamiento del Gobierno». Estas medidas económicas «tendrían el efecto de dejarle claro al pueblo cubano el coste de su orientación comunista». Aunque Estados Unidos logró aislar diplomáticamente a Cuba, los intentos que llevó a cabo en 1961 para que otros países latinoamericanos se sumaran a este proyecto de Kennedy fracasaron. Quizá el motivo fuera el problema que señaló un diplomático mexicano: «Si declaramos públicamente que Cuba es una amenaza a nuestra seguridad, cuarenta millones de mexicanos se morirán de risa».²¹ En su estudio definitivo sobre el embargo, Salim Lamrani destaca lo extremas que han sido las restriccio-

nes. Estados Unidos ejerció una «fuerte presión diplomática» sobre los países que se negaron a colaborar en el aislamiento de la isla, llegando incluso a amenazar con cortarles la ayuda económica. En 1999, el Departamento de Estado presionó a una empresa jamaicana para que no construyera un complejo hotelero en Cuba, y logró su objetivo. La empresa sueca Ericsson fue multada con 1,75 millones de dólares por haber reparado equipos cubanos, y el Departamento del Tesoro multó a una compañía estadounidense con 1,35 millones de dólares por vender cebada (Lamrani señala, de nuevo, que esto constituye una violación del derecho internacional, que prohíbe impedir el comercio de alimentos, incluso en tiempos de guerra.) Los efectos de la política de embargo han sido, por supuesto, devastadores.²²

Particularmente duro ha sido su impacto sobre el sistema de salud cubano, que se ha visto privado de suministros médicos esenciales. Amnistía Internacional demostró que «el embargo ha contribuido a la desnutrición, que ha afectado principalmente a mujeres y niños, así como al mal abastecimiento de agua y a la falta de medicamentos». En 1992, el Congreso aprobó lo que se llamó la «Ley de Democracia Cubana» (CDA), impulsada por demócratas liberales y con un fuerte respaldo del presidente Clinton. Una investigación llevada a cabo durante un año por la American Association of World Health afirmó que esta intensificación de la guerra económica por parte de Estados Unidos había tenido unos «trágicos costes humanos», provocando «graves déficits nutricionales» y «un devastador brote de neuropatía que ha afectado a decenas de miles de personas». «Únicamente se ha evitado una catástrofe humanitaria porque el Gobierno cubano ha mantenido» un sistema de salud que «se considera, de forma unánime, el modelo preeminente en el tercer mundo». El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha concluido que el embargo impone «limitaciones directas al disfrute de los derechos humanos por parte de los ciudadanos de Cuba». Sin embargo, tales limitaciones no se entienden como violaciones de los derechos humanos en el marco doctrinal hegemónico; muy al contrario, la versión ofi-

cial defiende que el objetivo de las sanciones es confrontar las violaciones de los derechos humanos que se producen en Cuba.²³

Es significativo que apenas se hayan producido protestas entre los círculos de la élite. El resto del mundo, e incluso la mayoría de la población norteamericana, se opone a la política de Estados Unidos hacia Cuba. Pero sus sucesivos Gobiernos han mantenido, con un fanatismo implacable, unas políticas brutales e ilegales hacia la isla. Como Lars Schoultz señaló en un estudio de 2009, Estados Unidos «no solo se ha negado durante medio siglo a mantener unas relaciones diplomáticas y económicas de normalidad con La Habana», sino que «ha pasado la mayor parte de estas últimas cinco décadas tratando abierta y activamente de derrocar al Gobierno de la isla, o, en los circunloquios disfrazados de eufemismos que emplea la actual Comisión para la Asistencia a una Cuba Libre, tratando de “acelerar la transición de Cuba”». ²⁴

¿Cuál fue el crimen cometido por Cuba contra Estados Unidos? ¿Cómo se explica la actitud de histerismo, el castigo colectivo, las décadas de apoyo declarado al terrorismo? ¿Por qué estaba dispuesto Estados Unidos a desafiar el derecho internacional y a la opinión pública del mundo entero en su intento de acabar con una pequeña nación insular? Lamrani señala que las justificaciones públicas oficiales fueron variando a lo largo de las décadas. Primero se habló de la nacionalización por parte de Castro de bienes de propiedad estadounidense (es decir, la devolución de la riqueza de Cuba a la propia Cuba). Después se adujeron los vínculos del país caribeño con la Unión Soviética (justificación que tenía poco sentido, ya que dicha relación era tanto consecuencia de la política estadounidense como su causa). Posteriormente, se mencionó el apoyo de Cuba a los movimientos de liberación en el sur global. Y, por último, una vez terminada la Guerra Fría, cuando ya no existían las justificaciones habituales para mantener una política de tanta dureza contra Cuba, los responsables políticos esta-

dounidenses manifestaron encontrarse profundamente preocupados por los abusos contra los derechos humanos en la isla (argumento que es casi cosa de risa, pues el apoyo internacional de Estados Unidos a regímenes que violan los derechos humanos se mantiene inalterable).²⁵

De hecho, gracias a los anales de los registros del Departamento de Estado sabemos exactamente cuál era la verdadera «amenaza cubana»: el «desafío exitoso». Castro había demostrado claramente su desprecio por los intereses de los inversores estadounidenses y estaba comprometido con las políticas de redistribución. Si ese modelo tenía éxito, podría extenderse y representar una amenaza para los «intereses estadounidenses» (es decir, los intereses comerciales estadounidenses) en todo el mundo. Durante su campaña electoral, John F. Kennedy había manifestado su preocupación por el hecho de que «la misma pobreza, descontento y desconfianza hacia Estados Unidos que auparon a Castro al poder» se encontraban latentes «en casi todos los países latinoamericanos». Richard Nixon, en su memorando sobre su reunión de 1959 con Fidel Castro, dejó claro que lo que más le preocupaba era «la casi servil sumisión de Castro a la opinión predominante de la mayoría —la voz de la multitud— más que su ingenua actitud hacia el comunismo». Castro «parecía estar obsesionado con la idea de que su responsabilidad era llevar a cabo la voluntad del pueblo, cualquiera que esta fuera en un momento dado».²⁶

Arthur Schlesinger Jr., en su calidad de jefe de una misión latinoamericana, informó a Kennedy de que la revolución cubana corría el riesgo de «propagar la idea castrista de que uno podía hacerse cargo de sus propios asuntos». Esta idea, explicó, entrañaba un gran atractivo en toda América Latina, donde «la distribución de la tierra y otras formas de riqueza nacional favorece enormemente a las clases propietarias» y «los pobres y los desfavorecidos, inspirados por el ejemplo de la revolución cubana, exigen ahora tener oportunidades para llevar una vida digna». La CIA también advirtió: «La sombra de Castro se cierne sobre nosotros porque las condiciones sociales y económicas en toda América Latina fomentan la oposición a

las autoridades gobernantes y alientan la demanda de un cambio radical».²⁷

Los intentos de Estados Unidos por controlar Cuba se remontan a la Doctrina Monroe de 1823, que proclamaba el derecho de Washington a dominar todo el hemisferio. John Quincy Adams instruyó a su gabinete señalando que el poder de Estados Unidos iba en aumento mientras que el de Gran Bretaña estaba en declive, de modo que Cuba (y, de hecho, todo el hemisferio) acabaría cayendo en manos de Estados Unidos por las leyes de la «gravitación política», como una manzana cae de un árbol. La historiadora Ada Ferrer documenta que Estados Unidos reivindicó el derecho «a ejercer un dominio permanente e indirecto» y a «intervenir militarmente en Cuba, sin necesidad de ser invitado». De hecho, como explica Keith Bolender, Estados Unidos estaba convencido de que «la posesión de Cuba era algo natural, predestinado y clave para cumplir con las expectativas nacionales fundamentales». En la propaganda estadounidense, los cubanos solían ser representados como incapaces de gobernar su propio país, país que se describía alternativamente como «una mujer indefensa, un bebé desvalido, un niño necesitado de orientación, un luchador incompetente por la libertad, un campesino ignorante, un ingrato innoble, un revolucionario mal educado o un comunista contagioso».²⁸

Para 1898, las leyes de la gravitación política de Adams habían obrado su magia permitiendo a Estados Unidos llevar a cabo la operación militar conocida como «la liberación de Cuba», que, en realidad, fue una intervención para evitar que la isla se liberara del dominio español, convirtiéndola en lo que los historiadores Ernest May y Philip Zelikow describen acertadamente como una «colonia virtual» de Estados Unidos. El principal puerto de Cuba, en la bahía de Guantánamo, sigue siendo hoy en día una colonia real, que se retiene en virtud de un tratado de 1903 que Cuba se vio forzada a firmar bajo presión militar. En años recientes, y en flagrante violación de los términos de dicho tratado, este enclave se ha utilizado como campo de detención para los haitianos que huían del terror de la junta militar apoyada por Estados Unidos y

como centro de tortura para sospechosos de haber atacado, o intentado atacar, a Estados Unidos.²⁹

La «colonia virtual» logró su liberación en 1959. Pero en cuestión de meses comenzó el asalto, llevado a cabo con las armas de la violencia y la asfixia económica, para castigar a los habitantes de «esa pequeña república infernal», como la había llamado el expansionista racista Theodore Roosevelt, al que enfurecía tanto que deseaba «borrar a su pueblo de la faz de la Tierra». Hasta el día de hoy, los cubanos se niegan a aceptar que su papel es servir al amo, no jugar a la independencia. Lamrani concluye que «el estado de sitio económico del que es víctima el pueblo cubano nos recuerda que Estados Unidos, al aplicar medidas de guerra en tiempos de paz contra una nación que jamás ha sido una amenaza para su seguridad nacional, claramente no ha renunciado a su antigua aspiración colonial de integrar a Cuba dentro de su territorio».³⁰

NUESTRA PEQUEÑA REGIÓN

La manera de lidiar con un virus es matarlo e inocular a todas sus posibles víctimas. Cuba sobrevivió, pero sin la capacidad de alcanzar su temido potencial, y América Latina fue «inoculada» con brutales dictaduras, como el golpe de Estado en Brasil que instauró un régimen militar en 1964. Los generales, según telegrafió el embajador norteamericano Lincoln Gordon, habían llevado a cabo una «rebelión democrática». Esta rebelión, proclamó, fue «una gran victoria para el mundo libre», que debería «crear un clima mucho más favorable para las inversiones privadas». Al acabar con lo que Washington consideraba un clon de Castro, los generales lograron «la victoria más decisiva para la libertad de mediados del siglo xx». Brasil permaneció bajo un régimen militar hasta 1985.³¹

Un documento político del Consejo de Seguridad Nacional de 1954 expone con claridad la doctrina estadounidense. Con el reconocimiento de la existencia de una «tendencia en América Latina hacia regímenes nacionalistas que se sostienen en

gran parte por su interpelación a la masa de la población», y ante la preocupación tanto por el «sentimiento antiestadounidense» como por las «crecientes demandas populares de mejora inmediata del bajo nivel de vida de las mayorías», la política oficial establecía «detener la deriva de la región hacia regímenes radicales y nacionalistas». El nacionalismo, según dicha doctrina, está fuera del alcance de los latinoamericanos, ya que implica un Gobierno que prioriza los intereses de la población por encima de los intereses estadounidenses. La tarea de Estados Unidos era asegurar que los países basaran «sus economías en un sistema de empresa privada» y crearan «un clima político y económico favorable a la inversión», con ejércitos que comprendiesen «los objetivos de Estados Unidos» y se alineasen con ellos. Los objetivos declarados para la política estadounidense en América Latina incluían «la solidaridad hemisférica» en apoyo de sus «políticas mundiales», el desarrollo «ordenado», «la salvaguarda del hemisferio» a través del fortalecimiento de las fuerzas militares, la eliminación de la «amenaza» comunista, el acceso de Estados Unidos a las materias primas, la obtención de apoyo para nuestra política exterior en otros lugares del mundo y la «estandarización de la organización, el entrenamiento, la doctrina y el equipamiento militar latinoamericano bajo las directrices de Estados Unidos». Nótese la clara ausencia de cualquier retórica idealista sobre autogobierno y libertades civiles.³²

Comunista era un término que la teología política estadounidense empleaba con frecuencia para referirse a las personas que se mostraban comprometidas con la idea de que «el Gobierno tiene la responsabilidad directa del bienestar del pueblo», tal como lo expresa un informe del Departamento de Estado de 1949. O, en palabras de John Foster Dulles, los «comunistas» son aquellos que apelan a «los pobres [que] siempre han querido saquear a los ricos». La mayor amenaza, según ellos, era que llevarían a las naciones a transformar su economía de modos que reducirían «su disposición y capacidad para complementar las economías industriales de Occidente» (planeamiento que es esencialmente acertado y una buena defini-

ción operativa de *comunismo* en el discurso político estadounidense). Con ese trasfondo, no sorprende que John F. Kennedy afirmara: «Los Gobiernos del tipo civil-militar de El Salvador son los más eficaces para contener la penetración comunista en América Latina».³³

El modelo ya estaba trazado. En Guatemala, por ejemplo, el presidente democrático y capitalista Jacobo Árbenz había implementado algunas de las temidas políticas nacionalistas al ampliar el derecho al voto, permitir la organización de los trabajadores y distribuir tierras no cultivadas entre los pobres. Naturalmente, esto desató el pánico. Un informe de la CIA de 1953 describía la situación en Guatemala como «adversa a los intereses estadounidenses» debido a la «influencia comunista [...] basada en la defensa militante de reformas sociales y políticas nacionalistas». Estas políticas «radicales» incluían «la persecución de los intereses económicos extranjeros, en particular los de la United Fruit Company», una medida que había recibido «el apoyo o la aquiescencia de casi todos los guatemaltecos». El Gobierno estaba procediendo a «movilizar al campesinado, hasta entonces políticamente inerte», al tiempo que debilitaba el poder de los grandes terratenientes. Para empeorar la situación, había surgido «un fuerte movimiento nacional» con el objetivo de «liberar a Guatemala de la dictadura militar, el atraso social y el “colonialismo económico”» que habían marcado su historia. El éxito de la reforma agraria amenazaba la «estabilidad» de los países vecinos, donde la gente que pasaba dificultades estaba tomando buena nota. El historiador Greg Grandin destaca que Árbenz era «enormemente popular» y tenía «el mandato de extender los ideales de la democracia política al ámbito social». En resumen, la situación era intolerable.³⁴

En consecuencia, la CIA organizó un golpe de Estado exitoso, utilizando «todos los avances de la guerra psicológica». La democracia guatemalteca llegó a su fin y el país se convertiría en uno de los peores mataderos del hemisferio.³⁵